

Límites de la Blitzkrieg Neoliberal!

Cananea, Símbolo Político

- ★ Sociedad que no Moldea a su Voluntad el Gobierno
- ★ Volver a Golpes a la Ruta Perdida de la Modernidad
- ★ Que Ponga los Pies en la Tierra la Clase Política

LORENZO MEYER

En su último libro, (*La ciencia social y su obligación moral*), Alan Wolfe, un sociólogo estadounidense, sostiene que la modernidad es básicamente el resultado de la acción de dos fuerzas extraordinariamente poderosas: el Estado y el mercado. Ahora bien, el objeto de la modernización, la llamada sociedad civil —fundamento moral insustituible tanto del Estado como de la economía— tiende, unas veces con éxito y otras sin él, a resistir la acción de los modernizadores. La historia de México es un claro ejemplo de lo dicho por Wolfe en cuanto a las fuentes y fuerzas del cambio y a la resistencia al mismo. Pero no es necesario ir a examinar la historia de las reformas borbónicas para comprobar lo dicho por el sociólogo neoyorquino, basta con ver hoy el caso de Cananea.

Como es por todos sabido, la mina de cobre más importante de México ha vuelto a convertirse en un símbolo político. Lo fue ya en 1906 y lo es de nuevo en 1989, cuando primero se le declaró desde lo más alto de la pirámide autoritaria, en quiebra irremediable, pero luego, tras dos meses de resistencia sindical, desde las mismas alturas se tomó la decisión de revertir

CANANEA, SIMBOLO

Sigue de la primera plana

el proceso. El salinismo, por así decirlo, encontró una piedra de mineral de cobre en su camino.

En efecto, la declaración de quiebra de la empresa hecha por el gobierno el domingo 20 de agosto de este año —cuando la sección 65 del SNTMMSRM se disponía a renegociar su contrato colectivo—, resultó espectacular y parecía inapelable, pues la respaldaba la toma sorpresiva de la población, —al cobijo de la noche— por una fuerza militar calculada en varios miles de efectivos. La forma y el contenido de

la decisión del gobierno —contestar un pliego petitorio tradicional de los mineros con el cierre de la empresa manu militari y la liquidación de los trabajadores— fueron vistos como símbolo de la nueva relación de dureza del gobierno con los sindicatos oficiales, por tanto tiempo raíz y razón del PRI.

Desde la perspectiva de los gobernantes, hoy simplemente no hay alternativa a forzar a los sindicatos a adecuarse —y rápido, pues el tiempo apremia a la balanza de pagos— a las exigencias de aumento de productividad de la mano de obra, pues

en ese aumento está basada una parte fundamental de la nueva estrategia de crecimiento por la vía de las exportaciones, y que, naturalmente, requiere de una relación capital-trabajo distinta a la que existió en el pasado, cuando un mercado protegido no castigaba la improductividad. En las nuevas circunstancias, Cananea se presentó como un caso ideal para un ejercicio pedagógico. Se trataba de una empresa estatal, exportadora, moderna, pero cuya planta de 3.200 trabajadores tenía un exceso de poco más de 12% y cuyo sindicato había logrado

además, un contrato colectivo que permitía ausencias injustificadas hasta por 105 días (lo que daba por resultado un ausentismo de 25%) y defendía un reglamento interno de trabajo que contenía una maraña de más de 400 categorías que impidían la flexibilidad y el uso óptimo de la mano de obra. Cananea, finalmente, era una empresa cuyas ventas anuales de cien millones de dólares generaban utilidades pero no muchas, pues sus costos de producción eran de 50% a 70% superiores a los de empresas similares en otras partes del mundo. Actuando de manera decidida

frente a esta situación, el gobierno pretendió dar, una vez más, una lección sencilla pero importante a los trabajadores, a sus líderes y a la sociedad en su conjunto: o las viejas estructuras corporativas se hacían funcionales al proyecto neoliberal —como es el caso del sindicato de telefonistas— o el Estado usaría de todo su poder legal, militar y político para deshacerlas y con la pedería forjar el nuevo sindicalismo, uno con el que se negociara sólo en función de la productividad.

En principio, y desde la perspectiva gubernamental, elegir Cananea para la ac-

P O L I T I C O

ción didáctica, no parecía una mala decisión. El contenido del contrato colectivo de los mineros de Cananea no podía ser aceptable para una opinión pública cansada de la corrupción y el abuso sindicales. Así pues, y también en principio, no era ilegítima la pretensión de modificar ese contrato colectivo para darle a una empresa estatal importante, como es Cananea, una productividad mayor, óptima, y que es la que la sociedad en su conjunto tiene derecho a demandar y esperar. Sin embargo la forma prepotente, autoritaria e insensible con que la tecnocracia gubernamental quiso imponer su punto de vista sobre el de los mineros —forma que inevitablemente lleva a pensar en Chile: el cobre mezclado con el neoliberalismo y el Ejército como catalizador—, hizo que se despertaran simpatías por el sindicato en muchas zonas del amplio frente de lucha donde la sociedad mexicana está tratando, a la vez, de resistir y adecuarse a la acción —en realidad, embesitada— del gobierno y sus poderosos aliados internos y externos.

Por todo lo anterior, fue con cierta sorpresa que se recibió la noticia dada el miércoles pasado por el Presidente de la República, en el sentido de que los críticos de la acción gubernamental en Cananea se habían "precipitado" en sus juicios, pues ahora resulta que no se va a liquidar a los trabajadores de la Compañía Minera de Cananea, pese a que esa justamente había sido la inequívoca y tajante declaración presidencial del 25 de agosto. En contraste con lo dicho entonces, la semana pasada el Jefe del Poder Ejecutivo anunció al país que la discutida empresa cuprífera reanudaría actividades "sobre bases más firmes", que su sindicato no desaparecería y que, en cambio tendría un excepcional aumento de 33 por ciento, que la zona fronteriza se ampliará hasta abarcar a Cananea, que se crearán nuevas actividades en esa población, que los mineros serán copropietarios de la empresa, etcétera.

Para el observador común y corriente no es po-

sible saber qué fue exactamente lo que sucedió a partir del momento en que Cananea fue ocupada militarmente y que el sindicato se negó a aceptar la quiebra, el cierre y la liquidación. Lo único que queda claro es que el gobierno dio marcha atrás respecto a su posición inicial. A falta de mayores datos, no es descabellado suponer que la razón de esta retirada se encuentra en que el blitzkrieg neoliberal que ha desatado el gobierno apoyado en la energía acumulada históricamente por la presidencia, ha encontrado uno de sus límites. De ser ese el caso, debemos felicitarnos, pues entonces Cananea es una muestra de que la sociedad no es siempre la masa inerte que a veces parece ser, y sobre la cual el gobierno golpea y moldea a voluntad.

Desde las reformas borbónicas del siglo XVIII y hasta hoy, la acción del gobierno —del Estado— ha sido el gran cincel que ha dado forma a la sociedad mexicana. Sin embargo, ahora que la energía estatal se está agotando, la dirigencia política pretende dejarle las herramientas —el marro y el cincel— a esa otra fuerza a la que hizo referencia el profesor Wolfe: al mercado. Se trata de una fuerza en verdad extraordinaria pero despiadada en extremo con las clases subordinadas, que están destinadas a ser de nuevo los grandes perdedores, justo como lo fueron esa primera vez que los liberales se hicieron cargo de los destinos de México. En efecto, la Constitución de 1857 declaró de manera dogmática y en nombre de la modernidad, que en ese México de mediados del siglo pasado ya no debería haber indios sino exclusivamente ciudadanos; el resultado del dogma liberal fue aterrador: la supuesta búsqueda de la libertad terminó en dictadura, y el grueso de los pueblos de indios perdieron lo poco que aún tenían —sus tierras y sus formas comunitarias de vida— sin conseguir nada mejor a cambio. Para ellos la modernización no condujo a la adquisición efectiva de la ciudadanía sino a un desastre económico, cultural y político y, finalmente,

entre 1910 y 1920 a una rebelión popular y a una carnicería donde, otra vez, los más pobres llevaron la peor parte. Tras el cataclismo social de 1910-1920, el Estado decidió, en nombre de la justicia social revolucionaria, tomar a su cargo la tarea de la modernización. Desafortunadamente, al final de ese camino aguardaba otro desastre: un Estado obeso y corrupto que resultó incapaz de mantener, no ya su promesa de justicia social, sino el mero crecimiento económico.

Hoy en el neoliberalismo, como antes en el liberalismo, se quiere que las fuerzas del mercado nos vuelvan a meter, a golpes, a la ruta perdida de la modernidad. Otra vez se desea darle la voz cantante a la oferta y a la demanda, al libre intercambio entre la periferia y el centro. Sin embargo, la "sociedad civil", es decir, las víctimas de la modernización —que son la mayoría—, se defiende. Y a veces como en Cananea, derrota los planes cuidadosamente trazados por la tecnocracia —los neocientíficos— en sus oficinas centrales de la ciudad de México. Sin embargo, esas victorias son aún más la excepción que la regla. Por ahora, la sociedad mexicana está, básicamente, indefensa frente a la alianza que impone la modernización: alta burocracia oficial-gran empresa nacional-capital externo. Y sin embargo, es justamente esa sociedad la única fuente de la fuerza política y moral que puede evitar los excesos de los modernizadores, salvarlos de éxitos que encierran en su seno el peligro de conducir al país a un callejón sin salida, tal y como ocurrió a principios del siglo, es decir, a forzar una reacción social en circunstancias extremas, donde la modernización y la neociudadanía ya no sean posibles.

Necesitamos ahora no una Cananea, sino muchas, que le den aquí y ahora a las clases mayoritarias de la sociedad, la capacidad de reacción que haga a la joven clase política poner los pies en la tierra y negociar su proyecto con los de los demás... sin el ejército y por la vía de una lucha democrática efectiva, sin fraudes, y con una base moral sólida, cuya ausencia hoy se nota.